

Un panorama inquietante.

Lluvia de millones, ¿para qué?, ¿para quién?

JOSÉ MANUEL NAREDO



Es doctor en Ciencias Económicas y pertenece al Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado. Cuenta con una larga experiencia investigadora que combina reflexiones de fondo sobre los fundamentos del pensamiento económico, con análisis concretos que abarcan desde el seguimiento de la coyuntura económica (con especial referencia a los aspectos patrimoniales) hasta el funcionamiento de los sistemas agrarios, urbanos e industriales y su relación con los recursos naturales y el territorio. Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Medio Ambiente 2000, con el Premio Internacional GEOCRÍTICA 2008, con el premio Panda de Oro 2011, otorgado por el WWF con motivo de su 50 aniversario y con el Premio de la Fundación Fernando González Bernáldez 2018. Para conocer su trayectoria y sus numerosas publicaciones cabe remitir a su libro *Luces en el laberinto* (La Catarata, 2009) que expone su autobiografía intelectual o a su página Web: elrincondenaredo.org

El artículo de Gerardo Moreno que figura en este mismo número del *Cuaderno* sobre los Fondos Next Generation de la UE asignados a nuestro país traza un panorama inquietante. Porque a la importancia de estos fondos le sigue cierta ambigüedad en la definición de objetivos, políticas y modos de reparto y seguimiento, lo que hace dudar de la idoneidad de los resultados. Los objetivos suenan bien y se parecen en el contenido y en la forma de presentarlos a los de esa «carta a los Reyes Magos de parte de Naciones Unidas» que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En efecto, al igual que los ODS, los cuatro ejes



y las diez políticas palanca que orientan la aplicación de los fondos del Plan de Recuperación, Transición y Resiliencia (PRTR) en España anuncian buenos deseos expresados con términos fetiche a la moda. Nos hablan de promover transiciones energéticas justas e inclusivas,

infraestructuras y ecosistemas resilientes, modernización y digitalización del ecosistema empresarial, cohesión social y territorial, una nueva economía... o una Administración para el siglo XXI. Pero al halo de sonora ambigüedad que arrastra este discurso tan imaginativamente

poblado de no-conceptos, le sigue la opacidad a la hora de seleccionar los proyectos y asignar los dineros, espoleada, además, por la urgencia de hacerlo en plazos perentorios.

Como la era de la planificación pasó a la historia, ya no es la Administración pública la que establece y dota ahora de forma mínimamente precisa los planes, programas y proyectos, sino que se limita a hacer una convocatoria de propuestas a la que se espera que concurse la iniciativa privada presentando proyectos supuestamente acordes con las vagas orientaciones antes indicadas. Con lo cual los grupos empresariales con más capacidad y hábito de manejar buenos contactos y de usar una potente consultoría se llevarán la parte del león de los fondos asignados, si no hay algún freno que lo impida, y tenderán a seguir inundando el país de megaproyectos e infraestructuras ahora reciclados con envolturas ecológicas, verdes, resilientes, inclusivas, justas... y sostenibles. Esta tendencia general se verá reforzada por el gran peso que mantiene en nuestro país el capitalismo clientelar. Un panorama de Administraciones parasitadas desde antiguo por los intereses empresariales y partidistas que mandan en cada sector o en cada municipio hace que dichas Administraciones trabajen normalmente en favor de estos y que la corrupción prospere,

la mayoría de las veces, con cobertura legal. El maná de fondos europeos presagia así un gran festín para la picaresca político-empresarial reinante, reflejada en el interminable rosario de casos de corrupción que han venido aflorando en los tribunales y en la prensa. Casos que, como es bien sabido, llegan ejemplarmente hasta los más altos representantes de la pirámide del poder político y empresarial, con implicaciones que van desde la Casa Real hasta expresidentes autonómicos y de la patronal, siendo la evasión fiscal el deporte preferido que viene practicando con ahínco la picaresca hispana a todos los niveles.

En este contexto, una llamada firme al saneamiento político y económico apoyada con potentes medios de lucha contra la corrupción y el fraude fiscal y con una dotación de medios adicionales para asegurar una buena selección, seguimiento y evaluación de resultados de los proyectos es condición necesaria para garantizar su buena orientación y desarrollo, así como su adecuación a las necesidades sociales. Unido a que una política que de verdad promueva la cohesión y la inclusión social debería apoyarse conjuntamente en el saneamiento del IRPF (sobre todo con vistas a los grandes evasores) y en la puesta en marcha de la Renta Básica Universal, como IRPF negativo para los más necesitados. Sin embargo,

paradójicamente, la única de las diez «políticas palanca» del PRTR que carece de dotación es la de «Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible», con sus cuatro componentes:

1. Medidas y actuaciones de prevención y lucha contra el fraude fiscal.
2. Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI.
3. Mejora de la eficacia del gasto público.
4. Sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones (tal y como consta en la

figura 1 y en la tabla 1 del artículo de Gerardo Moreno antes citado).

Lo cual nos invita a temernos lo peor... ¿Servirán los nuevos fondos para seguir ahora con más fuerza colonizando y saqueando Extremadura como base de recursos y sumidero de residuos en favor de intereses ajenos? ¿O ayudarán a regenerar su amplio territorio con actividades, ecológica y socialmente, saludables? Desde estos *Cuadernos extremeños* trataremos de inclinar la balanza hacia lo segundo siguiendo con luz y taquígrafos el destino de estos fondos y enjuiciando sus resultados.